

Nuevo Laredo: crimen desorganizado

Carlos Resa Nestares

Eran las once de la noche del ocho de abril de 2003 cuando Martín Fonseca Martínez ingresó de urgencias en el Hospital Central de Nuevo Laredo. Minutos antes lo había recogido una ambulancia al borde de la carretera. Tenía el rostro ensangrentado y hematomas por todo el cuerpo. Según su propio relato, iba circulando por el oeste de la ciudad cuando otro vehículo le cerró el paso. Salió un individuo. A empujones le obligó a introducirse en el coche. Una vez dentro le amarraron las manos. A partir de ese momento los captores lo mortificaron con golpes, insultos... y preguntas. Después de un rato de interrogatorio móvil a la vieja usanza y nulas respuestas, uno de los ocupantes del vehículo dio con el quid de la cuestión. No era que Fonseca Martínez fuese un tipo duro. “Oye, éste no es el güey que andamos buscando, nos equivocamos”. Cesó la paliza y minutos después lo liberaron. En su pausada huída, uno de los secuestradores le lanzó un billete de cien dólares al bulto. “Para que te cures”, le dijo. En el mes siguiente este mismo equívoco se repitió en otras dos ocasiones.

El actual ciclo de violencia en Nuevo Laredo tomó vuelo el 26 de septiembre de 2002 con un evento bastante inofensivo. Ese día un comando disparó contra la puerta de un gimnasio. Dentro se ejercitaba el comandante de la Policía Ministerial en Nuevo Laredo, Arturo Pedroza Aguirre. Las miradas acusatorias se volvieron contra Fernando Manuel Moreno Martínez, antiguo miembro del Servicio Secreto, ex agente de la Policía Judicial del Estado de Tamaulipas, ex madrina de la Policía Judicial Federal y pistolero del notorio sindicalista local Pedro Pérez Ibarra. Tenía motivos. Cuatro meses atrás Pedroza Aguirre lo había detenido, aunque lo dejó en libertad sin cargos. A ojos extraños pareció una típica estrategia de la policía, fruto de la necesidad de demostrar quien está al mando. Un paso periódico de un baile que el policía puede capitalizar de manera inmediata, con la extorsión, o en el medio plazo, sometiéndolo a protección. Pedroza Aguirre ya conocía esta metodología. En 1997, a su paso por la comandancia de la policía judicial en Matamoros, le había aplicado la misma medicina, en dos episodios diferentes, a dos distinguidos exportadores de drogas: Osiel Cárdenas Guillén y Hugo Baldomero Medina Garza. Y lo hizo así pese a que sí existían cargos contra Medina Garza.

Pero Moreno Martínez podría tener otro motivo más personal para el rencor. Pocos días antes de su detención, un comando de veinte personas vestidas de policías federales entró en el domicilio de Dionisio Román García Sánchez en San Pedro Garza García. Lo secuestraron, lo torturaron y tiraron su cadáver en Reynosa. Moreno Martínez había sido socio y amigo de García Sánchez en el negocio de la distribución de drogas. Una de las múltiples teorías sobre este incidente señalaba a Pedroza Aguirre como el director del comando asesino. Un año después de la detención de Moreno Martínez, por la frecuencia de la Policía Municipal una voz comunicó su ejecución. Tres días apareció su cadáver, sometido a intensa tortura, en San Nicolás.

Pero Pedroza Aguirre fue más preciso en la información sobre su atentado. Días después señaló como responsables a Edgar Valdés Villarreal y a dos de sus ayudantes. Los dos últimos, atemorizados por el señalamiento público, huyeron a Estados Unidos. Uno de ellos volvió al cabo de un año

para visitar a su madre. Al día siguiente un comando lo secuestró y nunca más se volvió a saber de él. La suerte de Valdés Villarreal, un ex policía judicial de Coahuila, no fue mucho mejor. Un comando lo secuestró en julio de 2003 en compañía de Sergio Villarreal Aparicio. En un lapso de tres fatídicos días secuestraron a un elenco de parientes de Villarreal Aparicio. En tres incidentes diferentes desaparecieron su segunda y su primera esposa, primas entre sí, su cuñado, dos menores y su ex suegro y ahora tío político, José Támez García, un histórico de la distribución de drogas en Nuevo Laredo. A Támez García, ya jubilado del negocio, lo habían secuestrado un año antes. Sólo recuperó su libertad tras el pago de un millón de dólares.

Aparte del enredo sentimental de Villarreal Aparicio, la historia presenta otras afinidades. En 1973 en un rancho propiedad de Támez García ejecutaron a ocho personas. El episodio fue el pistoletazo de salida a una brutal represión en Nuevo Laredo. En 2003 en un rancho de su ex yerno Villarreal Aparicio en Coahuila, que antes había pertenecido a otra de las hijas de Támez García, el Ejército detuvo a ocho personas. En el boletín de prensa de la Procuraduría General de la República se les acusó de delitos muy graves. Pero al menos uno de los detenidos, el ex comandante de la Policía Judicial Federal y miembro de los comandos especiales del ejército, Pablo Obregón Ramos, recobró la libertad al mes de su detención. Fue la oportunidad de oro que un esperaba un comando para asesinarlo en su domicilio de Reynosa.

Valdés Villarreal, según la información de Pedroza Aguirre, estaba asociado en el negocio de las drogas con Eloy Treviño García. Las voces que se escuchan en la emisora de la Policía Municipal lo habían señalado como el cadáver que seguiría a Moreno Martínez. Su final no fue tan trágico. Tras una delación, el ejército lo detendría en agosto de 2003 en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Treviño García tenía una larga carrera a sus espaldas. Trabajó como jefe de grupo en la Policía Judicial de Tamaulipas pese a tener una orden de aprehensión por distribución de drogas. Abandonó la disciplina policial y pasó a ser pistolero privado de Juan García Ábrego. De esta actividad resultó en su primera detención. Curiosamente, un individuo con los mismos apellidos Treviño García, pero de nombre Emilio, fue jefe de homicidios de la Policía Ministerial en Nuevo Laredo hasta marzo de 2003.

La confrontación radical de Pedroza Aguirre con todo este grupo, unido por ligas bastante laxas y a menudo en conflictos internos de intereses, al que se denomina de manera genérica Los Chachos, por el mote de García Sánchez, no deja de tener su cierta ironía. Buena parte de sus miembros habían sido compañeros en la Policía Judicial de Tamaulipas a principios de los años noventa. De hecho, el mayor mérito de García Sánchez era ser hijo de un director de la Policía Judicial al que cesaron en 1988. Había gozado de la amistad y protección de muchos policías en la ciudad, desde el difunto Guillermo González Calderoni, quien inició su carrera como comandante de la Policía Judicial Federal en 1980 en Nuevo Laredo hasta la actualidad. En Nuevo Laredo, González Calderoni coincidió con otro histórico de la policía mexicana, aunque en este caso por la rama de la Dirección Federal de Seguridad, Rafael Chao López.

Todos los destapados por Pedroza Aguirre sufrieron después un cúmulo de desgracias. El único que permanece libre y vivo es la víctima del inocente atentado. Terminó una carrera policial de veinte años en junio de 2004. Lo despidieron como comandante de la Policía Ministerial ya en Matamoros. Entre Nuevo Laredo y su cese había sido el jefe de un etéreo grupo de Homicidios que le proporcionaba cobertura para moverse por todo el estado y comandante en Tampico. En este destino se encontró con uno de sus grandes amigos, el coordinador de ministerios públicos de la Procuraduría General de la República, Martín Gutiérrez Gómez. Ambos habían coincidido en Nuevo Laredo con los mismos cargos.

Pedroza Aguirre se jubiló con un relumbrante historial: acusaciones prescritas por protección a ladrones de automóviles en el Estado de México, las mismas que se repetirían ya en Tamaulipas,

papel protagonista en dos recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y un fugaz paso por la cárcel, de 1999 a 2001, por los delitos de abuso de autoridad, intimidación, coacción de servidores públicos, lesiones y los que le resulten. En lenguaje menos técnico, Pedroza Aguirre le había pegado un tiro en el tobillo a un individuo. El delito de éste fue piropear a la novia de Pedroza Aguirre en el recurrente espacio de contratiempos: un gimnasio. Luego aprovechó su condición para intimidarle. Ninguno de estos antecedentes coartó al Federal Bureau of Investigations para emitirle un par de felicitaciones por sus servicios a la cooperación internacional.

La actividad de Pedroza Aguirre en Nuevo Laredo coincide en el tiempo con la llegada del grupo al que se denomina Los Zetas a costa de una corona fúnebre que acabó pateada por policías federales y militares. Es más, la salida atropellada de Pedroza Aguirre de la comandancia de Nuevo Laredo se solapa en días con el asesinato del primer jefe de Los Zetas, Arturo Guzmán Deceña a manos de los militares. Otra oportuna delación condujo a los militares hasta el restaurante donde se encontraba. Pedroza Aguirre tenía una larga historia de conflictos con la Policía Municipal de Nuevo Laredo. Pero el episodio que aceleró su salida tuvo lugar en noviembre de 2002. Pedroza Aguirre entró en el despacho del director de la Policía Municipal de Nuevo Laredo, pistola en ristre y golpeando a quienes se cruzaban en su camino. Solicitaba la liberación inmediata de uno de sus subordinados, detenido por secuestro. Pedroza Aguirre consiguió su propósito y se marchó. Su arrogancia creó un conflicto institucional que dio con él fuera de Nuevo Laredo, al menos de manera orgánica.

La historia de Los Zetas no es la clásica de una privatización de la industria de la protección. Tampoco puede decirse que Los Zetas hayan sido unos distribuidores de drogas en sentido estricto. Aunque realizaron algunas transacciones por cuenta propia, no era ésa su función ni con los militares, primero, ni en la empresa de Cárdenas Guillén después. Sólo su acceso fácil a la mercancía les permitía realizar operaciones de escala menor. Los Zetas han sido, sobre todo, una cooperativa de la violencia. En principio prestaban sus servicios al ejército. Entre 1999 y 2000, en diversas tandas, cambiaron de cliente y pasaron a vender sus oficios a un empresario privado de drogas, Cárdenas Guillén. Privatizaron su clientela. No había muchas diferencias en el tipo de servicio prestado. Otra circunstancia permaneció constante más allá del tránsito de la actividad pública a la privada. A lo largo del tiempo siempre estuvieron sujetos a un solo cliente, lo que a la postre le dio un cierto sentido de patronazgo y los asimilaba a la organización que les pagaba.

Los Zetas llegaron a Nuevo Laredo con intención de extorsionar o vender protección privada a quien se dejase. Los factores productivos que se invierten en ambas actividades son muy similares: violencia y credibilidad. Deseaban diversificar su demanda. En lo alto de su agenda de potenciales clientes estaban los comerciantes de drogas. Reúnen las condiciones óptimas: tienen dinero, algunos en grandes cantidades, y muchos derechos difusos o en riesgo, susceptibles de ser protegidos. Pero sus clientes no se acabaron en el ámbito estrecho de la mortecina exportación de drogas. Protegieron y extorsionaron a contrabandistas, de personas y de mercancías, y continuaron en rubros con una catalogación legal difusa, como las salas de masajes, los bares y los vendedores de autos, nuevos y usados.

Entre los personajes de la industria de la droga local, susceptibles de ser extorsionados, estaban todos los conocidos de García Sánchez. Además de la aversión que les llegó a tener Pedroza Aguirre a todos ellos, a este grupo de individuos, cada uno con redes de distribución propias, los unía el hecho de que compraban cantidades masivas de protección en la Policía Municipal de Nuevo Laredo. Moreno Martínez era el contacto a través de su hermano Hugo, segundo comandante en esa institución. Los objetivos de Los Zetas, como los de Pedroza Aguirre, se encontraban con una fuente directa de competencia en la Policía Municipal. Y ese conflicto por la venta de protección, o siquiera por la extorsión, ha sido el principal origen de las recurrentes muertes en el seno de la Policía Municipal.

Por una serie de carambolas, la dirección de la tropa de la Policía Municipal llegaría a manos de Martín Hilario Landa Herrera. Entre muchos otros, Treviño García fue su subordinado en la Policía Judicial de Tamaulipas entre 1989 y 1994. Landa Herrera es también un superviviente de la Policía Judicial de Morelos en la época en la que proliferaban los secuestradores. Pero la Policía Municipal, lo mismo que la policía estatal o las instancias federales de seguridad, están lejos de comportarse como un ente monolítico. Las disputas internas dentro de la Policía Municipal toman cuerpo en incidentes ridículos, como el que enfrentó a Landa Herrera con el director de la Academia de Policía por el ingreso de tres cadetes, y acaban en asesinatos.

Los efectivos militares destacados en Nuevo Laredo y sus alrededores son bastante inofensivos con la población en general, lo cual incluye a los asesinos. Los cuerpos de ejecutados han llegado a aparecer a escasos dos kilómetros de uno de sus retenes permanentes. Tienen una larga historia de cargamentos de marihuana encontrados al borde del Río Bravo. Los que mandan desde la ciudad de México, por el contrario, tienen una eficacia quirúrgica. A cambio, muestran un respeto por los derechos humanos que haría palidecer de envidia a Harry el Sucio. En marzo de 2003 un grupo de treinta Gafes entraron en un garaje para realizar destrozos antes de llevarse una camioneta de un agente aduanal, una caja de güisqui y un Audi blindado que el día anterior habían utilizado en un enfrentamiento armado. En su huida se les une la Policía Municipal, lo cual deriva en un enfrentamiento entre ambos grupos. Este episodio sólo acabaría cuando un vehículo Hummer del ejército llegó al rescate de los Gafes y les abrió paso entre las huestes municipales. Antes y después se registraron disputas similares entre miembros de la Policía Municipal y los Gafes.

La oficina de la Procuraduría General de la República en Nuevo Laredo ha tenido graves disputas internas que han acabado en querrelas periodísticas. Ninguna de ellas tenía en mente la protección de los ciudadanos. El capitán militar Adolfo Ruiz Ibarra, quien no era un mirlo blanco en la dirección de la Agencia de Federal de Investigaciones, acabó asesinado a los dos meses y medio de llegar al puesto. Como poco, de las oficinas del organismo en Nuevo Laredo salió la información que permitió asesinarlo. En el momento del atentado, una madrina de Ruiz Ibarra estaba de vacaciones en su natal Durango. Cuando volvió sin enterarse de lo sucedido lo despidieron, como habían hecho con todos los trabajadores privados de Ruiz Ibarra.

La carrera de Los Zetas por crear un tipo de servicio desconocido en México, la venta de protección privada ilegal desde el sector privado, no fue muy lejos. En la actualidad están en sus estertores, vendiendo sus servicios de violencia aquí o allá, pero sin mayor capacidad para generar ingresos propios continuados. Uno de quienes les contrata de vez en cuando es el michoacano Carlos Rosales Mendoza, un exportador de marihuana de calibre menor. En principio, la fama pública fue funcional en la expansión de su negocio de extorsión en Nuevo Laredo. Las fuerzas de seguridad pública en la ciudad de México fueron parte fundamental de sus actividades de propaganda. Les atribuían todo tipo de tropelías, incluyendo muchas que no eran su responsabilidad. Entre una larga lista, a esta última categoría pertenece el asesinato de tres agentes drogados de la Agencia Federal de Investigaciones en el estado de México. Alberto Benjamín Arellano Félix, después de su detención, declaró lo obvio: que, por encima de su negrísimo historial, "nos culparon de todo". Los Zetas tuvieron la mala fortuna de sustituir a Arellano Félix como cabeza de turco en las mentes de policías ineficientes y desinformados. Pero esas culpas, que nunca se presentaron ante los tribunales oportunos, tenían su parte positiva. Aparecían como invencibles, insuperables en el uso de la violencia.

El inconveniente de este tipo de publicidad no deseada está que ha colocado al grupo en el centro de la diana política, como antes lo estuvieron muchos Miguel Ángel Félix Gallardo, García Ábrego, Amado Carrillo Fuentes o el propio Arellano Félix. Tras la escopeta están una pléyade de funcionarios tratando de cobrar la presa y acudir en busca de su recompensa dentro de la jerarquía burocrática. Por si fuera poco, Los Zetas han tenido un desafío añadido: superar la animadversión de sus ex

compañeros militares, mucho más intensa por sus comunes orígenes. No hay peor cuña que la de la misma rama y los militares han tratado por medios diversos de extirpar el árbol torcido con el objetivo de mostrar su superioridad real sobre cualquier potencial desertor.

Esa imagen de marca, que en principio fue de gran ayuda, se convirtió en parte integral de su tumba empresarial. Una vez adquirido el prestigio de violencia es cómodo ir a extorsionar a cualquier persona. Los Zetas es una tarjeta de presentación que intimida por sí sola. Pero, con una fuerza laboral de pequeño tamaño y casi fija, declinante incluso tras las bajas provocadas por el ejército, los abandonos y los suicidios, es casi imposible evitar las falsificaciones. Los Zetas son una cooperativa de violencia con gran capacidad para reprimir las falsificaciones. Pero no tienen un servicio de información que les dirija hacia un fenómeno muy insidioso y multiforme, como las falsificaciones. Sin información previa, su potencia de fuego se vuelve ineficiente. Para quienes falsifican la imagen de marca, es un gran negocio. No tienen ningún coste porque no pagan regalías al propietario de la imagen. Al tiempo, se agranda de manera brutal la eficacia de sus servicios.

Aunque no sea ésta la intención de los defraudadores, que también están interesados en mantener el prestigio de marca, la falsificación continuada deteriora la calidad del producto verdadero. Si los potenciales clientes tienen dificultades para diferenciar la protección verdadera de la falsificada, tendrán mayores incentivos para abandonar la protección, que además no tiene la capacidad física para reprimirlos. Nike o Lacoste podrían hablar largo y tendido de este mismo efecto. Y para paliar los problemas de identificación se recurre a cantidades mayores de violencia, pero sin ningún tipo de dirección apropiada. Se recurre a la violencia letal contra los defraudadores, que trata de ser ejemplarizante, y a los secuestros informativos. Éstos, remedo de las tácticas antiguerrilleras más clásicas, consisten privar de libertad a alguien con el exclusivo objetivo de recolectar información. Su desenlace puede ser trágico o no dependiendo de la disponibilidad a cooperar del secuestrado.

Precisamente ha sido el problema de la falsificación el que ha convertido el mercado de la extorsión en Nuevo Laredo en un caos de violencia. La lista es tan larga como se quiera. Policías municipales que se disfrazan de policías antidrogas o ministeriales. Policías ministeriales que visten de civil, de policías federales o de negro al modo que la mitología popular atribuye a Los Zetas. Los Zetas que cambian su atuendo de manera aleatoria: por el verde caqui o por las camisetas de la Agencia Federal de Investigaciones. Militares vestidos de civiles. Los miembros de la Agencia Federal de Investigaciones que copian la indumentaria de Los Zetas. Este recurso tiene la eficacia de evitar que se les identifique, lo cual es un avance para quienes realizan actividades ilegales. Pero es un inconveniente brutal a la hora de atraer clientes, que se encuentran desorientados sobre la calidad, si quiera el origen, de los servicios de protección que se ofrecen. Y, a río revuelto, ganancia de pescadores. Los pandilleros más ínfimos han tratado de extorsionar haciéndose pasar por cualquiera de las partes en conflicto. Días después del gran tiroteo de 2003, un marido despechado se hizo pasar por mafioso para secuestrar a su mujer. En Nuevo Laredo ya hasta los niños amedrentan a sus compañeros de escuela diciéndoles: “mi papá es de Los Zetas”.

Entre quienes utilizaron este método de navegar con bandera de conveniencia estuvo el coordinador de fiscales federales en Nuevo Laredo, José Manuel Muñoz Morales. Heredó el puesto de José Guadalupe Veloz Chávez, un ex policía municipal que vendía información a los distribuidores de drogas. Como Pedroza Aguirre, Muñoz Morales había sido víctima de un atentado en diciembre de 2002. Ya en el cargo tuvo dos actividades principales. La primera era corretear a policías municipales. Se llegó a tal punto que en junio de 2003 el secretario municipal ordenó a la Policía Municipal no acudir a llamadas en las que se informe de tiroteos o grupos armados “a fin de evitar enfrentamientos con la Agencia Federal de Investigaciones”. Su segunda obsesión era secuestrar nativos en cantidades industriales, sobre todo en el ramo de la industria de las drogas. Lo hacía con su propia empresa y vendiendo protección a cualquier banda de extorsionadores que estuviese dispuesta a

pagar un precio. En el mes y diez días que estuvo en el puesto se acumularon treinta y dos secuestrados. Pero Muñoz Morales nunca renunció a falsificar su propia imagen. Una semana antes de su detención, se permitió el lujo de anunciar a la prensa que dedicaría veinte camionetas y sesenta agentes a investigar los secuestros.

Los Zetas, quienes habían robado varios cargamentos de droga a los protegidos de Muñoz Morales, fueron una imagen de marca que utilizó de manera fraudulenta. Su objetivo era hacerse propaganda ante clientes y superiores. En julio de 2003 anunció a bombo y platillo el descubrimiento de un supuesto centro de espionaje de Los Zetas, que ya por entonces se había convertido en una prioridad para sus superiores en la ciudad de México. En la vivienda que utilizó para el teatrillo, y que había allanado dos días antes, introdujo material diverso que había recopilado en varios secuestros y saqueos. Ya puestos, aprovechó para continuar en las tareas de zapa contra sus competidores en la Policía Municipal. Presentó un listado de ciento un policías municipales. Junto a cada nombre las cantidades que percibían por no interferirse con Los Zetas.

La carencia de información de los propios actores en conflicto y la afición por la falsificación alcanza su cota máxima de escabrosidad cuando se deja una nota con referencias a Joaquín Guzmán Loera junto a varios cadáveres. Ya desde 2003, en la radio de la Policía Municipal se escuchaban amenazas entreveradas con un discurso grosero: “Ahora sí, agárrense porque ya estamos aquí”, “Somos gente del ‘Chapo’ y los vamos a cargar” y “¡Arriba Sinaloa!” Horas después del asesinato de Ruiz Ibarra, una voz por la misma frecuencia se identificó como asociado de Guzmán Loera. Después soltó una retahíla de amenazas: “Ya llegamos y nos los vamos a cargar a ustedes y a Los Zetas”. Otras voces, igual de fuleras, respondieron: “Aquí puro Zeta, ya bájale mejor”. Un fugitivo como Guzmán Loera, salvo que haya devenido en un incompetente de tiempo completo, no se hace publicidad tan burda y tan inútil. Es treta de los mafiosillos de tercera arrogarse relaciones que no tienen para amedrentar a terceros. Otros de los falsificadores tratan de desviar la atención de sus propios negocios. Si los muertos eran asalariados de Guzmán Loera, es evidente que el destinatario ya lo sabe. El mensaje era innecesario.

Pero el sarcasmo de la desinformación es que produce un efecto circular. Se convierte en una forma sanguinaria del apotegma monetarista: el billete falso se convierte en moneda de curso legal. A falta de mejor información, en el caos de la extorsión y la protección en Nuevo Laredo muchos se creen las falsificaciones. Algunos de estos cándidos son parte del mercado. Otros actúan como caja de resonancia que devuelve la información con una sobredosis de credibilidad. En este último apartado pueden incluirse dos categorías. Primero, los bastante desinformados burócratas de la Procuraduría General de la República, esos mismos que ignoraron las actividades ilegales de Muñoz Morales durante años y lugares hasta que el ejército se lo entregó en bandeja. Junto a ellos, o como derivación de sus declaraciones públicas, los medios de comunicación de la ciudad de México. Ambos tienen una supina adicción a construir puzzles de diez mil piezas a partir de la posesión de sólo dos. Las otras nueve mil novecientas noventa y ocho piezas se las inventan. La paradoja es constatar los grados de intoxicación informativa que, sobre esta base, padecen incluso los protagonistas de la exportación de las drogas.

Tras su detención, el exportador de cocaína José Albino Quintero Meraz, confesó que a principios de 2000 buscó a Cárdenas Guillén. No sin dificultades lo encontró. Según la bitácora que él mismo se había hecho, Cárdenas Guillén era propietario de las plazas de Matamoros, Reynosa y Río Bravo. No había hecho sino creerse uno de los mitos más geniales de la industria de las drogas en México: el de que existen plazas como territorios mafiosos de monopolio. Un mito que, como todos, no sobrevive porque se ajuste a la realidad sino porque es funcional a un orden social más amplio. Sirve, por ejemplo, para que Vicente Fox Quesada aparente eficacia en el combate a todas las empresas de exportación de drogas.

Es muy sencillo. Son sólo cuatro pasos. Primero, se toma un mapa de México. Segundo, se cuartea el mapa como se desee y a los pedazos se les llama plazas. Tercero, se asume que todos los detenidos en cada pedazo son parte del grupo criminal al que de manera tramposa y aleatoria se le ha asignado la titularidad de la plaza. Entre los detenidos son legión los cultivadores que desconocen si podrán vender su cosecha, mucho menos a quién, y los distribuidores minoristas que lo más cerca que han visto un cártel es a las puertas de los cines. Pero esto es indiferente al juego porque nunca se proporciona el listado completo de arrestados. Y cuarto, se suman los detenidos por partes y se incorporan al discurso presidencial: “En lo que se lleva de sexenio se han detenido a cuatro mil miembros de los Arellano Félix, a tres mil del cártel de Juárez, etcétera, etcétera.” Ni en sus sueños más guajiros, Arellano Félix sospechó gobernar una empresa de cuatro mil inútiles trabajadores. Mucho menos se los van a detener en el curso de cuatro años.

Este ejercicio infantil, que pasa desapercibido en los acrílicos medios de comunicación, se convierte en palabra de ley para Quintero Meraz. Pensando que Guillén Cárdenas tenía mando en plaza, le comunica su deseo de aterrizar un avión en el valle de Reynosa con trescientos kilogramos de cocaína. Guillén Cárdenas le contestó que no había problema. Tan sólo le solicitaba que, por favor, le comunicase la fecha concreta. Trataba de evitar el solapamiento de riesgos. Pero tan internalizada tenía Quintero Meraz la idea de la plaza que se sorprendió de que Cárdenas Guillén no le cobrase derecho de piso. Por su parte, Cárdenas Guillén demostró una impericia profesional flagrante. Fue incapaz de capitalizar la imagen de marca que otros le habían construido. Podría haberle cobrado a Quintero Meraz una suma importante de dinero sin mover un solo dedo, sin coste alguno.

Sin embargo, lo que en 2000 no quiso o no supo hacer, desde entonces se ha convertido en su única obsesión: la conquista, así, en términos militares, de la plaza de Nuevo Laredo. El exportador de drogas más inmóvil de la historia, que apenas salió de Matamoros a Playa Bagdad, se encontraría enfrascado en invadir territorio ajeno. Así debe creerse de seguir el discurso de los medios de comunicación de la ciudad de México y las declaraciones de los altos burócratas de la seguridad pública. Si se continúa por esta senda de análisis, la de una guerra entre dos bandos coherentes y bien definidos, habría que interpretar los eventos de Nuevo Laredo como una guerra de aniquilamiento lanzada por foráneos contra los nativos. Porque los muertos los ponen sólo los locales. En el sector privado los amigos de García Sánchez y Tamez García, que llevaban en el negocio de las drogas desde los años setenta, y la Policía Municipal por el sector público. También en el bando de las víctimas estarían los hermanos Arturo y Guillermo Martínez Herrera, quienes en los noventa tuvieron belicosas diferencias con García Sánchez por la distribución minorista de drogas. En el bando mortífero la presencia pública sería abrumadora: miembros de las policías estatales y federales, además de militares, apoyados por la muletilla privada de Los Zetas.

Más bien al contrario, la violencia en Nuevo Laredo no es el resultado de una lucha por ninguna entelequia llamada plaza. Es el producto de un pujante mercado de la extorsión aunado a una tremenda desinformación de sus múltiples actores. La violencia, típica de la extorsión pero no necesaria en el comercio de drogas, es la peor publicidad para atraer clientes a la plaza. Como se han quejado con reiteración los comerciantes locales, los episodios de violencia espantan a compradores e inversores. Y ambos conceptos incluyen a los exportadores de drogas, que son tan casi reacios a la violencia como el común de los ciudadanos. Es patente que desde 2002 la lujosa colonia Madero de Nuevo Laredo ha sufrido muchas bajas entre sus vecinos. Abandonan el área por miedo a ser víctimas de extorsiones o de episodios aleatorios de violencia. Entre los huidos están muchos de quienes se identificaban como exportadores de drogas. Tal es así que sus asesinos tuvieron que ir a buscarlos a Monterrey o a sus alrededores.

El comportamiento de la violencia en Nuevo Laredo obedece, en coordenadas más rimbombantes, a unas pautas generalizables a todo México: la debilidad de las estructuras de protección a la industria

de las drogas. Desde su punto álgido de los años ochenta, el mercado de la protección privada suministrada desde el sector público se ha deteriorado a pasos agigantados. Los despidos masivos y los frecuentes cambios en la dirección de los organismos de seguridad han acortado la estabilidad burocrática que exige la prestación del servicio. Los nuevos reclutas y los supervivientes de las purgas muestran el mismo interés en capitalizar el cargo público. Pero se encuentran faltos de la necesaria información sobre clientes y coartados, por mecanismos de control externo, de la utilización publicitaria de la violencia.

Antes estas carencias, desde el sector público se han dedicado con mayor intensidad a formas más inmediatas de ingresos que requieren menos capital humano y menor inversión inicial: la extorsión, el secuestro y el robo. Allí se han encontrado con muchos de los despedidos y con actores privados que han aprovechado algunos vacíos de manera momentánea. No es que desde las instancias de seguridad se haya alcanzado el grado de pureza tal que ya suministren protección pública, una circunstancia que sigue sin encontrarse. Tan sólo es que, por incompetencia de la oferta, en el sector público ha dejado de prestarse protección privada. En lugar de avanzar a una forma más avanzada, la protección pública y equitativa, se ha vuelto a una etapa más primitiva de regulación: la acumulación predatoria.

Este tipo de mecanismos causa enormes prejuicios a la industria de las drogas. Aparte de los perjuicios monetarios obvios de la extorsión, como no existe definición de objetivos, inserta amplios grados de volatilidad en el mercado e insufla grandes dosis de desconfianza entre participantes. Al carecerse de una mediación de un tercero imparcial con fuerza para imponer resoluciones, que es una de las funciones de la protección, el recurso a la violencia privada se hace más atractivo y frecuente. Pero este abandono de la protección tiene un efecto externo más nocivo. Como los policías carecen de información relevante, el número de sujetos pasivos de sus actividades se ha expandido hasta alcanzar al conjunto de la población.

Si se aplica este mismo esquema de razonamiento a otros ámbitos podrá llegarse a dos conclusiones: por qué aumenta la industria del secuestro y por qué, aún cuando el partido de estado abandonó el poder, la delincuencia se niega a disminuir por razones que no sean las propias del mercado. Por qué, en definitiva, falló la recurrente versión conspirativa de la delincuencia, ya fuese en solitario o acompañada de la nunca demostrada relación pobreza-delincuencia. Pasar de vender protección privada a pública no sólo requiere de un cambio de las elites gobernantes. En realidad, ni tan siquiera era necesario. Lo mismo puede decirse de la adicción de los burócratas a cambiar la legislación o los nombres de las fuerzas de seguridad privada, como si el derecho o el nominalismo modificasen comportamientos individuales o colectivos. Lo que sí exige ese cambio es mucha determinación para castigar los comportamientos ilegales dentro las fuerzas de seguridad. Y esto es algo que, en su actividad diaria, no demuestran ninguno de los partidos políticos con responsabilidades ejecutivas.

